Artículo 4. Financiación de los créditos extraordinarios.

Los créditos extraordinarios a que se refieren los artículos anteriores se financiarán con Deuda Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Artículo 5. Autorización para ampliar los créditos extraordinarios.

Los créditos extraordinarios a los que se refieren los artículos anteriores se consignan con carácter de ampliaciones con la finalidad de atender los intereses que se produzcan como consecuencia del momento en que se

efectúe el pago. La autorización de las ampliaciones de crédito corresponderá al Ministro de Hacienda.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANEXO**Servicio 01: Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales**

Aplicación	Denominación	Importe — Pesetas
	Programa 611.A: «Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda»	
	Artículo 22. <i>Material, suministros y otros</i>	
Concepto 229.	Para atender el pago de costas derivadas de diversas sentencias judiciales.	
	00 Recursos contencioso-administrativos 3/4450, 3/434/92, 3/2329/92 902/94 relativos a diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo	3.241.683
	01 Recurso 01/178/92, relativo a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 29 de noviembre de 1991	174.000
	02 Recurso 56/90, relativo a las sentencias dictadas por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Córdoba	9.456.102
	03 Recurso 87/92 se corresponde con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de mayo de 1993	94.182
	Artículo 35. <i>Intereses de demora y otros gastos financieros</i>	
Concepto 353.	Intereses de demora derivados de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1998	34.186.965
	Total Servicio 01: Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales	47.152.932

23664 LEY 9/2000, de 22 de diciembre, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 46.624.357.971 pesetas, para la atención de los gastos derivados de la ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren, Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, ha sido el instrumento

a través del cual el Estado y, con él, toda la sociedad española han querido rendir testimonio de honor y reconocimiento a cuantos han sufrido la violencia terrorista.

Una de las manifestaciones que la norma legal citada muestra como homenaje a las víctimas del terrorismo es hacer efectivo su derecho a ser resarcidos o indemnizados sobre la base de la responsabilidad civil existente, razón por la cual el Estado ha decidido asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de los actos terroristas.

Se trata, pues, de una mera compensación material dirigida a un colectivo cuyo sacrificio jamás podrá ser plenamente compensado, pero que representa, al menos, un reconocimiento expreso y público a unos valores democráticos duramente defendidos, demostrados y consolidados.

El objetivo perseguido por la presente norma es, por tanto, acelerar, en la medida de lo posible, la acción reparadora que los poderes públicos voluntariamente

han asumido, empleando para ello los mecanismos legalmente previstos, pues se trata de unas obligaciones cuyo cumplimiento es inaplazable y para las cuales no existe dotación presupuestaria alguna. Así, el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, prevé en estos casos que el Ministro de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado, pueda elevar el acuerdo del Gobierno la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales de concesión de un crédito extraordinario.

Además, en el presente supuesto nos encontramos no sólo con una opción, sino con el cumplimiento de un mandato legal, pues la disposición final segunda de la Ley 32/1999 impone al Gobierno la elevación a las Cortes Generales, en el plazo más breve posible, de un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender los gastos derivados de las indemnizaciones aducidas. De esta manera, el legislador ha querido asegurarse de que las obligaciones asumidas van a ser satisfechas con la premura debida.

Así, el Gobierno aprobó un proyecto de ley que fue remitido a las Cortes Generales para su tramitación y aprobación.

No obstante, la disolución de las Cortes Generales por el Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, sin que hubiese finalizado la tramitación del citado proyecto de ley, determinó la caducidad del mismo.

En cuanto a su contenido, la presente norma se limita a lo previsto en la legislación presupuestaria y en la Ley de la que trae causa. Así, se concede un crédito extraordinario al vigente presupuesto de gastos del Ministerio del Interior, como Departamento competente para gestionar y conceder las indemnizaciones descritas. Por otra parte, se prevé que el Ministro de Hacienda pueda ampliar el citado crédito extraordinario ante las dificultades para cuantificar los gastos totales, debido a la indeterminación apriorística del número total de beneficiarios, y se establece que el citado crédito extraordinario se financiará con deuda pública. Finalmente, prevé la incorporación de los remanentes del crédito al ejercicio inmediato siguiente.

Artículo 1. *Concesión del crédito extraordinario.*

Uno. Para atender las obligaciones derivadas de la ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, se concede un crédito extraordinario, dotado con 46.624.357.971 pesetas, en el vigente Presupuesto de Gastos del Estado, Sección 16 «Ministerio del Interior», servicio 01 «Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales», programa 221A «Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil», concepto 480.01 «Indemnizaciones y compensaciones derivadas de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo».

Dos. Los remanentes del citado crédito se incorporarán al ejercicio inmediato siguiente por acuerdo del Ministro de Hacienda.

Artículo 2. *Autorización para ampliar el crédito extraordinario.*

El crédito extraordinario previsto en el artículo anterior se declara ampliable en la medida que resulte insuficiente para atender las obligaciones que deban satisfacerse con cargo al mismo, a cuyos efectos el Ministro de Hacienda autorizará la correspondiente modificación presupuestaria.

Artículo 3. *Financiación del crédito extraordinario.*

El crédito extraordinario que se concede en el artículo 1 se financiará con Deuda Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de diciembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

ANEXO I

Cálculo económico víctimas del terrorismo

1. *Fallecimientos*

Indemnización fijada en la Ley	23.000.000 de pesetas
1.1 Total fallecidos con sentencia	500 personas
Cantidad a pagar por sentencias actualizadas superiores a 23.000.000	8.610.360.000 pesetas
Cantidad a pagar por sentencias actualizadas inferiores a 23.000.000	5.175.360.000 pesetas
Total a pagar por fallecidos con sentencia	13.785.360.000 pesetas
1.2 Número estimado de fallecimientos restantes a efectos Ley	500 personas
Cantidad estimada a pagar por fallecimientos restantes (por 23.000.000)	11.500.000.000 de pesetas
Total a pagar por fallecimientos	25.285.360.000 pesetas

2. *Gran invalidez e incapacidades en sus distintos grados*

2.1 Lesiones y secuelas con sentencia:

Total lesiones y secuelas con sentencia	589 personas
Media lesiones y secuelas con sentencia	8.837.281 pesetas
Total a pagar por lesiones y secuelas con sentencia	5.205.158.295 pesetas

2.2 Estimación de lesiones y secuelas sin sentencia:

* Número de afectados (sobre la base de 69 heridos con lesiones invalidantes que perciben pensión del Ministerio del Interior.)

Cálculo de porcentajes:

Porcentaje con gran invalidez	11 personas	16 %
Porcentaje con incapacidad permanente absoluta	31 personas	45 %
Porcentaje con incapacidad permanente total	14 personas	20 %
Porcentaje con incapacidad permanente parcial	13 personas	19 %

* Estimaciones 500 personas

Distribución:

Porcentaje estimativo con gran invalidez (16 %)	80 personas
Porcentaje estimativo con incapacidad permanente absoluta (45 %)	225 personas
Porcentaje estimativo con incapacidad permanente total (20 %)	101 personas
Porcentaje estimativo con incapacidad permanente parcial (19 %)	94 personas

Total a pagar aplicando la media (8.837.281 pesetas) obtenida en sentencia 4.418.640.318 pesetas

* Total a pagar según baremo

Por gran invalidez (65.000.000 de pesetas)	5.200.000.000 de pesetas
Por incapacidad permanente absoluta (16.000.000 de pesetas)	3.600.000.000 de pesetas
Por incapacidad permanente total (8.000.000 de pesetas)	808.000.000 de pesetas
Por incapacidad permanente parcial (6.000.000 de pesetas)	564.000.000 de pesetas

Total a pagar 10.172.000.000 de pesetas

Total a pagar por gran invalidez e incapacidades en sus distintos grados 15.377.158.295 pesetas

3. Lesiones no invalidantes

3.1 Lesiones con sentencia:

Total lesiones con sentencia	768 personas
Media lesiones con sentencia	559.951 pesetas

Total a pagar por lesiones con sentencia 430.042.148 pesetas

3.2 Estimaciones de nuevos lesionados:

Cifra adicional estimativa de nuevos lesionados a efectos de la Ley	700 personas
Total a pagar aplicando la media (559.951 pesetas) obtenida en sentencia	391.965.490 pesetas

Total a pagar aplicando una media (2.000.000 de pesetas) de los baremos de lesiones de RC. 1.400.000.000 de pesetas

Total lesiones no invalidantes 1.830.042.138 pesetas

4. Secuestros

Total secuestrados 77 personas

Cantidad a pagar: 6.000.000 de pesetas.

Total secuestros 462.000.000 de pesetas

5. Equiparación indemnizaciones en sentencia hasta baremo

Total a pagar 3.669.797.538 pesetas

Resumen

	Pesetas
Fallecimientos	25.285.360.000
Lesiones con secuelas invalidantes	15.377.158.295
Lesiones no invalidantes	1.830.042.138
Total a pagar por secuestros	462.000.000
Equiparación indemnizaciones en sentencia hasta baremo Ley	3.669.797.538
Cifra total a pagar	46.624.357.971

ANEXO II

Baremo de la Ley de Solidaridad

	Millones de pesetas
1. Indemnización por fallecimiento	23
2. Indemnización por gran invalidez	65
3. Indemnización por incapacidad permanente absoluta	16
4. Indemnización por incapacidad permanente total	8
5. Indemnización por incapacidad permanente parcial	6
6. Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes: Las establecidas en el baremo de lesiones permanentes no invalidantes por la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro del Automóvil.	
7. Indemnización por secuestro	6

MINISTERIO DE JUSTICIA

23665 *ORDEN de 21 de diciembre de 2000 relativa a la liquidación de las relaciones económicas preexistentes a 1 de octubre de 2000 entre la Mutualidad Notarial y los Colegios Notariales.*

La disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dispone en su apartado primero, letra A) que «los Notarios y los Corredores de Comercio colegiados se integran en un Cuerpo único de Notarios que dependerá del Ministerio de Justicia».

Este precepto ha sido desarrollado parcialmente por el Real Decreto 1643/2000, de 22 de septiembre, sobre medidas urgentes para la efectividad de la integración en un solo Cuerpo de Notarios y de Corredores de Comercio Colegiados.

En lo relativo a la financiación colegial, el preámbulo del precitado Real Decreto, declara que es preciso abordar el régimen de la financiación colegial «hasta ahora estrechamente vinculado a las aportaciones mutualistas» y, a tal efecto, el artículo 6 del citado Real Decreto afirma que desde su entrada en vigor «el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales no podrán percibir cantidad alguna procedente de las Mutualidades».

Desde el origen de la Mutualidad Notarial, han sido los Colegios Notariales los que se han encargado de la cobranza de las cantidades que deben ingresarse en el fondo de la Mutualidad, así como del pago de los auxilios y pensiones, a cuyo fin han mantenido la correspondiente estructura de medios materiales y personal afecto a las citadas labores en beneficio de la Mutualidad. Por otra parte, en relación al ejercicio del año 2000, como es lógico, existen cobros y pagos pendientes.

Como consecuencia de todo ello, para que sea viable la separación de la financiación de unos y de otra, es necesario proceder a la correspondiente liquidación de las relaciones pendientes entre la Mutualidad y los Colegios Notariales y el Consejo General del Notariado y, de este modo, determinar con absoluta transparencia el saldo existente y hacerlo efectivo.

Así, mediante este proceso de liquidación de tales relaciones económicas, se pone fin de modo definitivo a la vinculación preexistente entre la financiación colegial y las aportaciones mutualistas y se posibilita de que desde el ejercicio económico del año 2001 los presupuestos de una y de otros no contengan partidas que contravengan el mandato legal.

Con relación con las Juntas Directivas, dado que hasta que no se lleve a cabo la reforma del régimen de Previsión Social del Notariado, continúa vigente el Estatuto de la Mutualidad Notarial, aprobado por Decreto 2718/1973, de 19 de octubre, las Juntas Directivas de los Colegios Notariales, no obstante la separación patrimonial y financiera ordenada, seguirán ostentando las facultades previstas en dicho Estatuto, en orden al control y exigencia del cumplimiento de las obligaciones mutualistas.

Además, se aclara la obligatoriedad del uso del papel especial para copia simple y, al mismo tiempo, se ordena al Consejo General del Notariado que edite el citado papel, así como las hojas indubitadas y los sellos de seguridad y legalizaciones y legitimaciones, estableciéndose como obligación del Consejo General del Notariado y de los Colegios Notariales la remisión y envío a los Notarios del citado material, para dotar de mayor seguridad, si cabe, al uso de los mismos.

Por último, se atribuye como ingreso de los Colegios Notariales para subvenir los fines que la vigente legislación les atribuye y, por tanto, con el carácter de ingreso corporativo de aquéllos, el importe que perciban de los colegiados, relativo al uso obligatorio del papel especial para copia simple, hojas indubitadas, sellos de seguridad y sellos de legalizaciones y legitimaciones, al ser la distribución de este material obligatoria para el Consejo General del Notariado y para los Colegios Notariales y formar parte de la actividad ordinaria de éstos.

En su virtud, dispongo:

Primero.—La Mutualidad Notarial y los Colegios Notariales deberán, en un plazo que expira el 31 de diciembre del año en curso, proceder a liquidar las relaciones económicas preexistentes anteriores a 1 de octubre de 2000, derivadas de la administración patrimonial, cobranzas y pagos a que se refiere el artículo 7.º del vigente Estatuto de la Mutualidad.

Segundo.—El saldo resultante de esa liquidación entre la Mutualidad Notarial y los Colegios Notariales deberá hacerse efectivo antes del día 1 de marzo del año 2001.

Tercero.—A partir del 1 de octubre de 2000 no existirá vinculación alguna entre la financiación de la Mutualidad y la de los Colegios Notariales. Los contratos que pudieran celebrar entre sí dichas entidades quedarán sujetos a las reglas generales de la contratación.

Cuarto.—La desvinculación o separación de las aportaciones mutualistas de la financiación colegial no dispensa a las Juntas Directivas de los Colegios Notariales de sus obligaciones en orden al control y exigencia del cumplimiento de las cargas mutualistas por sus colegiados.

Quinto.—La emisión del papel especial para su uso obligatorio en copia simple y en aquellos documentos en los que su empleo resulte procedente para su mayor seguridad de las hojas indubitadas y de los sellos de seguridad corresponde al Consejo General del Notariado, que establecerá sus características y modelo, así como el precio del mismo.

Sexto.—Será obligación del Consejo General del Notariado la remisión y envío a los Colegios Notariales del papel especial, hojas indubitadas y sellos de seguridad a que se refiere el apartado anterior, los cuales, a su vez, estarán obligados a distribuir éstos entre sus colegiados, que abonarán su importe.

Séptimo.—De conformidad con el artículo 316.10 del Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba